

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, doce (12) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

DEMANDANTE	Yurany Andrea Betancur Gallo
DEMANDADAS	Positiva S.A.
RADICADO UNICO NACIONAL	05001 31 05 013 2023 10019 01
TIPO DE PROCESO	Ejecutivo
DECISIÓN	Revoca
ACTA DE DECISIÓN	052

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, proceden en esta oportunidad a resolver la apelación interpuesta por el apoderado de la parte ejecutante contra la decisión del 7 de diciembre de 2023, mediante el cual se negó mandamiento ejecutivo.

A continuación, se toma la decisión correspondiente, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

En escrito del 16 de noviembre de 2023, la señora YURANY ANDREA BETANCUR GALLO en nombre propio y en representación de su hija menor MARB, presentó ejecutivo conexo al proceso ordinario laboral 013-2017- 00476-00, deprecando en contra de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A, lo siguiente:

PRETENSIONES

Con fundamento en los hechos expuestos, muy comedidamente:

PRIMERO: Librese mandamiento de pago sobre las condenas establecidas en el proceso ordinario así:

- Intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sobre el retroactivo pagado a las ejecutantes a la tasa máxima legal permitida desde el 01 de diciembre de 2016 hasta el 30 de agosto de 2023.
- Por costas y agencias en derecho por valor de Seis Millones Ciento Sesenta Mil Pesos.
- Interese legales sobre el total del pago de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
- Interese legales sobre las costas y agencias en derecho

SEGUNDO: Se condene en costas y en agencias en derecho al ejecutado.

Y de manera subsidiaria:

PRETENSION SUBSDIARIAS

PRIMERO: De no acceder a los intereses moratorios, sobre el valor que debió pagar ejecutada, se conceda la indexación de las sumas de dinero indexado.

SEGUNDO: De no acceder a los intereses moratorios a las costas y agencias en derecho, se indexen las mismas.

Mediante auto del 7 de diciembre del año 2023, el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, niega mandamiento de pago, aduciendo que la sentencia de segunda instancia fue el proferida el 19 de Mayo de 2023, y de

conformidad a lo dispuesto en la sentencia C-208 de 2023, el cumplimiento de las sentencias a cargo de entidades públicas, es de diez meses, término que en el presente caso transcurre entre el 13 de junio de 2023 y el 13 de abril de 2024, por lo que se concluye que los conceptos que solicita no son exigibles para el momento en el cual se presentó la demanda ejecutiva conexa.

RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado del extremo procesal activo interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, indicando que la sentencia objeto de ejecución no se dio por el fallecimiento de un empleado público ni las partes demandantes tampoco tiene dicha calidad, igualmente el proceso que conllevó el presente no se realizó por la especialidad contenciosa administrativa, por ende, en primera medida, no es aplicable al caso la sentencia C 208 2023, dado que esta misma de manera taxativa estableció a quien aplica la disposición acusada.

También transcribe un aparte del contenido de la sentencia C-314 de 2021, para concluir que no puede equiparar una entidad de la Nación que es a lo que hace referencia el artículo 307 del CGP, con una entidad descentralizada como COLPENSIONES

En auto del 2 de febrero de 2024, el juzgado de origen decidió no reponer la decisión, remitiendo en apelación.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Pese a haberse surtido el respectivo traslado, no se arrimaron alegaciones finales.

PROBLEMA JURÍDICO

Consiste en determinar si, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 307 del CGP, en el caso objeto de estudio, no es dable ejecutar a la entidad accionada, o si por el contrario, dicha disposición no es aplicable al caso de marras.

CONSIDERACIONES

Inicialmente, vale recordar que el numeral 8 del artículo 65 del CPT la SS, establece que el auto que decida sobre el mandamiento de pago es susceptible del recurso de apelación.

Ahora, el análisis versará sobre lo que fue objeto de recurso conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 712 de 2001 que alude al principio de la consonancia, en virtud del cual la actividad de la segunda instancia se restringe a los puntos concretos de inconformidad.

Pues bien, la controversia suscitada en el caso bajo estudio, se circunscribe en establecer si era o no posible ejecutar a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., a las luces de los artículos 305 y 307 del CGP, normatividad aplicable al trámite laboral según remisión expresa del artículo 145 del CPT y la SS, las cuales disponen:

“ARTÍCULO 305. PROCEDENCIA. Podrá exigirse la ejecución de las providencias una vez ejecutoriadas o a partir del día siguiente al de la notificación del auto de obediencia a lo resuelto por el superior, según fuere el caso, y cuando contra ellas se haya concedido apelación en el efecto devolutivo.

Si en la providencia se fija un plazo para su cumplimiento o para hacer uso de una opción, este solo empezará a correr a partir de la ejecutoria de aquella o de la notificación del auto de obediencia a lo resuelto por el superior, según fuere el caso. La condena

total o parcial que se haya subordinado a una condición solo podrá ejecutarse una vez demostrado el cumplimiento de esta.”

...

“ARTÍCULO 307. EJECUCIÓN CONTRA ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO. Cuando la Nación o una entidad territorial sea condenada al pago de una suma de dinero, podrá ser ejecutada pasados diez (10) meses desde la ejecutoria de la respectiva providencia o de la que resuelva sobre su complementación o aclaración.”

Ésta última disposición fue analizada por la Corte Constitucional, quien en sentencia C-314 de 2021 estableció:

“63. La Sala encuentra que la expresión “la Nación”, contenida en el artículo 307 del Código General del Proceso se ajusta a la Constitución Política y, en consecuencia, rechaza las pretensiones del demandante de declarar su exequibilidad condicionada. Esta afirmación se fundamenta en los siguientes argumentos.

64. La medida dispuesta en la norma acusada se enmarca en la amplia potestad de configuración del legislador en materia de procedimientos judiciales. Asimismo, respeta los límites establecidos por la jurisprudencia a dicha potestad de configuración. Con fundamento en la amplia potestad de configuración del legislador en materia procesal, este expidió el Código General del Proceso. Dentro de los diversos asuntos de los que se ocupa este estatuto procesal, se encuentra la ejecución de providencias judiciales, que está incluida dentro del capítulo II. En este capítulo se encuentra el artículo 307, que establece una regla frente a la ejecución de entidades de derecho público, según la cual, cuando la Nación o una entidad territorial sea condenada al pago de una suma de dinero, podrá ser ejecutada pasados diez (10) meses desde la ejecutoria de la respectiva providencia o de la que resuelva sobre su complementación o aclaración^[72].

65. La decisión del legislador de limitarse a la expresión “La Nación” permite inferir que fueron expresamente excluidas otras entidades de la administración pública (como es el caso de las entidades descentralizadas por servicios) de la regla establecida en la norma. *Dicha determinación se ajusta a la amplia potestad que le asiste en materia procesal al legislador, en concreto, la posibilidad de determinar la naturaleza de las actuaciones judiciales y establecer los deberes, obligaciones y cargas procesales de las partes. Asimismo, al delimitar las entidades que serán la parte demandada, el legislador no hace cosa distinta que precisar la naturaleza de la actuación judicial, esto es, la ejecución de providencias judiciales contra entidades de derecho público. En efecto, el legislador dispuso un término específico que debe ser atendido por quienes pretendan la ejecución de una*

providencia judicial a su favor, cuando la parte demandada sea la Nación o un ente territorial, en los eventos en los que la competencia recaiga en la jurisdicción ordinaria.

66. Conviene precisar que, para las entidades demandadas que no encuadran dentro de la regla prevista en el artículo 307 de CGP -como es el caso de las entidades descentralizadas por servicios-, aplica la regla general establecida en el artículo 305 de dicho Código, que señala que podrá exigirse la ejecución de las providencias una vez ejecutoriadas o a partir del día siguiente al de la notificación del auto de obediencia a lo resuelto por el superior, según fuere el caso, y cuando contra ellas se haya concedido apelación en el efecto devolutivo. Esta regla general, resulta razonable y proporcionada ya que obedece a la naturaleza comercial de las entidades descentralizadas por servicios (actos de gestión)^[78]. En este sentido, reconoció este tribunal en su sentencia C-306 de 2019 que dichas entidades son necesarias para que el Estado pueda prestar óptimamente los servicios, por lo que el legislador puede crearlas ponderando el interés general de su participación en los mercados con la libertad de empresa.

67. De esta manera, considera la Sala Plena que las entidades descentralizadas por servicios pueden concurrir a los mercados para competir con el sector privado, atendiendo las dinámicas del mercado. Sin embargo, no están exentas de aplicar en ciertos eventos normas de derecho público, sin que lo anterior implique el abandono del régimen jurídico privado para sus actividades misionales. Por lo cual, no asiste ninguna razón que conlleve a la adopción de una medida desproporcionada o irrazonable por parte del legislador, al resaltar el principio de libertad de empresa y competencia frente a otras entidades privadas. Por lo cual, es apenas lógico que se deban regular en el mismo plano de igualdad, y que dicho grupo de entidades afines en materia del ejercicio de su libertad de empresa deban reconocer los derechos o intereses de las personas que hubiesen sido declarados. De esta manera, no cabe duda de que el legislador consideró que tanto las entidades privadas, como las entidades descentralizadas por servicios deben cumplir las providencias judiciales oportunamente y sin dilaciones injustificadas.

...

70. Por lo demás, la Corte observa que la disposición demandada busca el pago de las obligaciones ordenadas en fallos judiciales y la materialización del derecho sustancial. Al excluir de la regla a ciertas entidades públicas -tales como las entidades descentralizadas por servicios-, la norma también materializa el acceso a la administración de justicia y el deber constitucional y legal de las entidades de ejecutar las sentencias en firme sin dilaciones injustificadas. Este último fin fue advertido en la sentencia T-048 de 2019^[82], a propósito del cumplimiento de decisiones judiciales que ordenan a Colpensiones el pago de pensiones, el cual debe realizarse de manera oportuna a efectos de garantizar los derechos a la seguridad social y al mínimo vital de las personas pensionadas. Asimismo, señaló la Sala de Revisión que el artículo 307 del CGP sólo era aplicable a la Nación o a las entidades

territoriales, y no a otras autoridades administrativas como Colpensiones.” (Negrita y Subraya Intencional)

De lo expuesto, puede colegirse sin lugar a hesitación que, si bien el artículo 307 del CGP establece que cuando “La Nación” es condenada al pago de una suma dineraria, podrá ser ejecutada pasados diez meses, sin embargo, según la interpretación realizada por el máximo órgano constitucional, fueron expresamente excluidas otras entidades de la administración pública, como es el caso de las entidades descentralizadas por servicios, a quienes, se les aplicaría la regla general establecida en el artículo 305 de dicho Código, es decir, podrá exigirse la ejecución de las providencias una vez ejecutoriadas o a partir del día siguiente al de la notificación del auto de obediencia a lo resuelto por el superior.

Dilucidado lo anterior, pasará esta Colegiatura a analizar la naturaleza jurídica de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., recordando el contenido de lo dispuesto en el artículo primero del Decreto 1234 de 2012:

“ARTÍCULO 1°. Denominación social y naturaleza jurídica. Positiva Compañía de Seguros S.A. es una entidad aseguradora organizada como Sociedad Anónima, tiene el carácter de entidad descentralizada indirecta del nivel nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, sometida al régimen de empresas industriales y comerciales del Estado de conformidad con el artículo 97 de la Ley 489 de 1998.”

Aunado a ello, pertinente resulta traer a colación el contenido del artículo 68 de la Ley 489 de 1998, donde se define las entidades descentralizadas:

“ARTICULO 68. ENTIDADES DESCENTRALIZADAS. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de

funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Como órganos del Estado aun cuando gozan de autonomía administrativa están sujetas al control político y a la suprema dirección del órgano de la administración al cual están.”

Corolario a lo señalado, esta Sala de Decisión concluye que, POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. es una entidad descentralizada por servicios, razón por la cual, tal como lo afirma el recurrente, no se ajusta a los presupuestos del artículo 307 de CGP, y en tal sentido, se le aplicaría la regla general establecida en el artículo 305 de dicho Código, lo que permite exigir la ejecución a partir del día siguiente al de la notificación del auto de obediencia a lo resuelto por el superior.

No sobra mencionar que, la juez de instancia alude como argumento para no acceder a la petición de ejecución, lo indicado por la Corte Constitucional en sentencia C-208 de 2023 donde se estudió el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

Empero, a juicio de esta Colegiatura, la mentada providencia de constitucionalidad, no puede analizarse de manera aislada e independiente, pues en dicho asunto, se estudió fue la proporcionalidad del lapso de diez meses con que cuentan las entidades públicas, para el cumplimiento de las sentencias en la jurisdicción contenciosa administrativa. De modo que, se insiste, resulta imperativo analizar es lo que ya había dispuesto la misma corporación en la sentencia C-314 de 2021, esto es, que del artículo 307 del CGP se excluyeron las entidades descentralizadas por servicios.

Descendiendo al caso *sub lite*, y según la documental arrimada al plenario, se avizora que la demanda ejecutiva conexa, fue presentada el día 16 de noviembre de 2023, esto es, después de la ejecutoria del auto mediante el

cual se dio cumplimiento a lo resulto por el superior, y donde además, se aprobó la liquidación de costas dentro del proceso ordinario 013-2017-00476-00, providencia proferida el día 11 de julio del año 2023.

Por lo expuesto previamente, lo procedente será REVOCAR la providencia venida en apelación, para en su lugar, ordenar a la juez de instancia, realizar un nuevo estudio de la demanda ejecutiva presentada.

Sin costas en esta instancia al no haberse causado.

En mérito de lo expuesto, la **Sala primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín,**

RESUELVE

PRIMERO: Revocar el auto del 7 de diciembre de 2023 proferido por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín.

SEGUNDO: Ordenar al juzgado de conocimiento, realizar un nuevo estudio de la demanda ejecutiva presentada.

TERCERO: Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica en **ESTADOS**. Se ordena regresar el expediente al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

**EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE
CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados
N ° 44 del 12 de marzo del año 2024

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/161>

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **daf6cbec90bf962bdb909406c99bd440205d45d24402e3a86f17a5f0cf0cb8d6**

Documento generado en 12/03/2024 10:54:55 a. m.

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>